



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 42

ABRIL 2010

Un estado fallido y el imperio de la fuerza

Los pactos: una práctica recurrente

Después de la guerra civil de los 80, en Nicaragua se ensancharon las expectativas de construir una institucionalidad democrática y generar condiciones para procesar las demandas y los conflictos en un marco de paz y de participación plural. De hecho, desde entonces a la fecha, en todo el país se han realizado procesos institucionalizados de negociación entre el gobierno, la sociedad, los políticos y las instituciones, para legitimar la toma de decisiones.

Sin embargo, los liderazgos políticos abandonaron tempranamente esta nueva práctica de modernización política y se inclinaron, como tantas otras veces en la historia del país, por los pactos prebendarios. El más nefasto de ellos: el pacto entre los caudillos Alemán-Ortega. De esa manera, el pluralismo y la apertura de los primeros años se fue cerrando gradualmente con el pretexto de la estabilidad, primero y luego, con el de la gobernabilidad. El pacto amarró sucesivos acuerdos secretos y repartos corruptos que afectaron tanto a la economía como a la propia institucionalidad.

En estos acuerdos se enquistaron y reprodujeron las viejas prácticas políticas, la corrupción creció y se fortaleció, igual que la impunidad, el gobierno se separó aún más de la sociedad, se destruyeron el pluralismo, el control democrático del poder, se deslegitimaron completamente las recientes y débiles instituciones democráticas y se afirmaron los lide-

El grado de cinismo, brutalidad, desparpajo e impunidad, exhibidos por el oficialismo en la crisis política actual no tienen antecedentes históricos más que en aquellos gobiernos de cuño dictatorial. Los acontecimientos de violencia para estatal de la semana recién pasada, sin eximir de responsabilidades a los políticos atrassados de la derecha, reprodujeron el ciclo más peligroso de la historia política de Nicaragua: la violencia como incentivo para dar vida a pactos prebendarios que capturan el estado y deshacen las normas e instituciones, retorciéndolas en beneficio del cohecho, la impunidad y la corrupción.

Sin embargo, nunca como hoy, los funcionarios públicos habían demostrado tan poca vergüenza ni se habían deshumanizado tanto con tal de revivir un pacto inmoral donde nadie gana ya nada, ni siquiera ellos. Ese camino ha conducido al país a un punto de inevitable llegada: un punto de no retorno con impredecibles consecuencias.





razgos caudillistas con su cadena de cómplices y complicidades.

Las necesarias diferencias entre derecha e izquierda, entre programas políticos, entre oposición y gobierno se disolvieron en una exclusiva pugna al interior del juego pactista y en el reparto, la sociedad nicaragüense se fue quedando como rehén que depende del favor de los poderosos y no de sus derechos.

La crisis del pacto y el desequilibrio a favor del FSLN se acentuaron desde su llegada al gobierno; pero además, al hacerse evidente su proyecto político de monopolizar el poder también se desnudó lo que ya se intuía, que la institucionalidad no era más que una fachada y la principal fuente de empleo para las cortes de los caudillos. Nicaragua, tiene entonces, un estado fallido. Un estado sin legitimidad, incapaz de gobernar la sociedad en base a reglas. Un estado sin normas, reglas y regulaciones compartidas con la sociedad. Es un país sin instituciones y con una facción gobernándolo.

Las “leguleyadas” de última hora, como la miserable hoja de parrá conque se ha cubierto todos estos años el retorcimiento de las instituciones, hace que se gobierne con la Constitución bajo el brazo, para que cada quien la use a su conveniencia. Toda discusión sobre la constitucionalidad o la legalidad de cualquier acción, es estéril y termina en una prueba de fuerza. De allí que se valore más el conflicto y el chantaje que el respeto a la ley.

Si bien es cierto que una sociedad puede funcionar de este modo durante algún tiempo, también es cierto que las crisis recurrentes y la violencia política que generan, siempre han tenido finales de nefastas consecuencias. En Nicaragua eso se sabe muy bien.

Una crisis diferente

La situación estructural de la crisis actual es más grave que las anteriores. Se está jugando no sólo el control institucional que aporta una

fachada de legalidad, sino además, las condiciones para unas elecciones transparentes en el 2011, la reelección de Daniel Ortega y la posibilidad de que surja un nuevo liderazgo y una coalición política capaz de restaurar el proyecto democrático para el país. La tirada es alta, por eso el nivel de violencia exhibido.

Como en otras ocasiones, las explicaciones oficiales han querido reducirla a una coyuntura, si total, el país está acostumbrado y esas crisis son recurrentes. Para eso han argumentado que la oposición ha obstruido la elección de los funcionarios para los principales cargos del estado, retrasando la decisión y generando caos e ingobernabilidad. Toda una operación política para golpear a Ortega.

Mientras tanto, la oposición explica que el FSLN no ha querido negociar porque sus candidatos están cuestionados y no reúnen apoyo mayoritario en la Asamblea, apropiándose de los cargos ilegalmente.

Evidentemente, el sistema pactista de repartos ha colapsado y las intenciones de control monopólico del FSLN lo hace inviable para elegir a estos funcionarios. Pero en medio del caos, hay una ventana de oportunidad: la única solución para elegir a los magistrados es, por el momento, seleccionando personas que aseguren condiciones de idoneidad, integridad e imparcialidad tal como lo establece la ley. Y eso precisamente es lo que el gobierno quiere impedir.

Y ese acontecimiento, que es cotidiano en la vida republicana y democrática, en Nicaragua se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para las fuerzas políticas. Un punto de no retorno tanto para el FSLN como para la oposición en el cual van a demostrar realmente su vocación y su fuerza.

El establecimiento del autoritarismo

Los chantajes y exhibiciones de violencia de la pulseada en curso,

son la expresión de la importancia de la crisis. Durante los últimos veinte años, Nicaragua ha vivido varios episodios similares con largas parálisis del parlamento, la Corte Suprema de Justicia y la falta de nombramientos en distintas instituciones. En más de una ocasión la policía quedó entre la espada y la pared frente a estas crisis. En otras ocasiones las crisis políticas estuvieron acompañadas por rachas de violencia con expresiones fuertes como los tranques en las carreteras, el secuestro de personalidades por grupo armados y varios asesinatos de trascendencia nacional.

En esas ocasiones, el FSLN y el actual presidente nunca invocaron a la violencia como un peligro para la gobernabilidad, antes bien, la consideraban legítima, sobre todo porque en muchos casos ellos mismos la promovían como carta de negociación frente al gobierno de turno. Así, los políticos y los gobiernos anteriores se acostumbraron a negociar siempre al filo de la navaja. Doña Violeta, Alemán y Bolaños tuvieron sus dosis de este remedio. Pero entonces, el FSLN era el partido de oposición y hoy es el gobierno, de tal manera que el remedio se volvió peor que la enfermedad.

Basados en esa experiencia y habituados a la “normalidad” de las crisis, algunos piensan que en esta ocasión, así como ha ocurrido muchas veces, el alboroto terminará nuevamente en la clásica negociación. Después de eso se barrerán las calles y se volverá a la normalidad hasta el siguiente reparto. Así, muchos prefieren mirar para otro lado o fingen estar al margen de las consecuencias. Pero hay un cambio fundamental en esta dinámica.

Hasta el retorno de Ortega al gobierno, los episodios de crisis se manifestaban como parte de la inestabilidad heredada y las dificultades en la construcción de la institucionalidad democrática. Los movimientos, por violentos que fueran buscaban compensaciones y beneficios. Los pactos y negociaciones establecían



frágiles treguas entre una y otra repartición, y las instituciones buscaban su propio equilibrio interno.

Desde que el Frente regresó al gobierno y al esquema de estado-partido, esta manera de hacer las cosas se licuó completamente y esta crisis dejó de ser un resabio del pasado. Aunque su antecedente inmediato es el pacto, ya ha tomado distancia de él y prefigura claramente lo que todos temíamos: una forma de gobierno no deseada y autoritaria.

Las estructuras paralelas ya se han establecido como norma, los cargos en la función pública no obedecen a la ley sino al partido único, la violencia es parte del ejercicio del gobierno y quienes la ejercer gozan de total la impunidad, mientras que el resto de las instituciones y la sociedad se le subordinan. En cualquier parte del mundo, eso es una dictadura. No hacen falta los cadáveres en las calles, no importa que haya elecciones de vez en cuando, que se deje existir un par de medios críticos, una oposición política y algunas oportunidades de negocios. Los núcleos fundamentales del poder están controlados verticalmente.

Los nuevos aprendices

Nicaragua no es, ciertamente, el único caso donde el partido de gobierno presiona y agrede al parlamento. Otros países ya han tenido situaciones de este tipo. Pero en este país, hay quienes se cubren con el manto de la revolución y su continuidad para invocar esta excepcionalidad, los métodos de presión reñidos con la democracia y el ejercicio de la violencia en nombre del pueblo.

El aprendizaje político de la democracia, aquí ha sido un proceso lento. El Frente Sandinista se escudó mucho tiempo en la revolución como fuente de derecho para no rea-

lizar elecciones, y cuando las hizo en medio de la guerra, pudo justificar la continuidad del sistema de control total. Como partido, nunca hubo un consenso interno en relación a la democracia, menos en la cúpula del poder. Todas sus crisis internas fueron tratadas por eliminación en vez de permitir el debate sano y transparente, y la existencia de minorías y mayorías que se respetan.

Al asumir nuevamente el gobierno, reanudaron sus viejas prácticas, y en la crisis actual, con el parlamento sitiado y amenazando a los diputados de la oposición con morteros, mostraron una vez más, su



perfil más oscuro.

En todos los procesos políticos donde los parlamentos han sido agredidos, desde la revolución francesa hasta los golpes militares o los autogolpes a la Fujimori, se han engendrado dictaduras o severas restricciones de la democracia, que es casi lo mismo. Esto es así, no porque se agrede una pieza clave del sistema político, sino porque se mata el pluralismo y los procedimientos democráticos que lo hacen posible. Que se hagan manifestaciones para solicitar, objetar o presionar es legítimo, que se utilice la violencia fuera de todo contexto para agredir y chantajear, es propio de una dictadura.

La imagen de los magistrados orteguistas sentados en trío, dictan-

do sentencia, con tono golpeado, intimidando y amenazando, se parecía mucho a la de aquellas juntas militares, que aparecían en televisión leyendo sus decretos autoritarios. Sólo les faltaba el uniforme y unas cuantas estrellas. Su despliegue en la calle junto al “pueblo”, en realidad muchos temerosos empleados públicos, una portátil pandilleril y una policía complaciente, se parecía a los apaleos exhibidos por todos los regímenes de matonaje institucionalizado.

Un recurso contraproducente

Como hemos mencionado antes, la violencia política no es un fenómeno nuevo en Nicaragua. Fue generalizada y con mucha fuerza durante los primeros años de la transición, pero gradualmente se fue disminuyendo hasta aparecer de manera casi esporádica en coyunturas muy particulares durante los últimos años.

En general, la población no la ve como un recurso legítimo, pero en el pasado ha sido adoptada por el FSLN como un método privilegiado para presionar a la hora de las negociaciones políticas. Más recientemente, el gobierno la ha oficializado como método para contener cualquier expresión de oposición y ya cuenta con grupos para estatales muy bien organizados que salen a la calle a ejecutar acciones decididas por una estructura de mando reconocida.

Este tipo de práctica puede que sea exitosa para intimidar a unos pocos, sobre todo cuando se exhibe con el derroche de violencia y agresividad como el de la semana anterior, puede que también sea exitosa para intimidar por un cierto tiempo. Pero, a la larga, su efecto es contraproducente como estrategia política

de largo plazo, incluso para el mismo gobierno.

Al parecer el mismo gobierno se dio cuenta al ver las distintas reacciones que generó la racha de violencia: incrementó el descontento y la animadversión de la sociedad en general contra el gobierno, debilitó aún más la precaria credibilidad de la policía, difundió una muy mala imagen del país a nivel internacional, afirmó las posiciones entre las fuerzas políticas de oposición y estuvo a punto de activar a la comunidad internacional. Nada podía ser más equivocado.

Pero el problema de fondo en la utilización de estos métodos, es que sus organizadores y ejecutores creen tener a estos grupos de choque bajo control para ejercer la violencia política, pero bien se pueden escapar de sus manos para otros tipos de violencia. Ese es un riesgo cercano en el horizonte social del país y sus consecuencias serán desastrosas.

La visita del padrino venezolano

En medio del caos, el presidente venezolano, Hugo Chávez realizó una visita al país, que no pasó desapercibida de ningún modo. Al contrario llamó la atención, no sólo por el habitual figureo del mandatario, sino también porque terminó de aclarar la enorme duda que algunos tenían sobre la cooperación de Venezuela. “Es de estado a estado”, dijo sin ambages. En ese sentido, el padrino venezolano vino como una especie de comisario político, a revisar las cuentas y las tareas asignadas.

Nadie en el país se opone a una relación de cooperación con Venezuela, se trata de un gobierno electo, legal y legítimo. Pero, la relación de estado a estado invocada por Chávez

es, en realidad de gobierno a partido en el gobierno. En Nicaragua, no hay nada que se parezca a un estado que asume sus compromisos y la Asamblea Nacional no se da por enterada. De ahí que los mega proyectos manejados en secreto ponen a Nicaragua en la frontera de los intereses de Chávez y la comprometen sin ninguna discusión en el país.

Además, estos proyectos implican la continuidad política en la relación entre ambos países. De Venezuela no se puede opinar, pero



¿supone eso que en Nicaragua también tiene que seguir Ortega en el gobierno a cualquier precio? Si esto es así, como lo da a entender el propio presidente, los intereses de Chávez estarían lesionando seriamente las posibilidades de la democracia en Nicaragua. El país no necesita padrinos, necesita ciudadanos que ejerzan sus derechos y contribuyan activamente a resolver sus propios problemas.

Siempre hay una salida

Cada vez más, el país se adentra en el callejón oscuro donde se intuyen todos los peligros. El gobierno no quiere escuchar que la mayoría de la sociedad está preocupada. Así ocurrió a finales de los 80, desafortunadamente el autismo es una en-

fermedad permanente, sobre todo cuando de ella se obtienen beneficios.

No hay salidas fáciles ante la obcecación oficial y el cumulo de intereses agrupados a su alrededor. El primer paso en la solución, es que la oposición se mantenga firme y elija a personas idóneas e íntegras para ocupar los principales cargos del estado, aunque el gobierno se oponga. La otra solución, la que pasa por una nueva negociación sin principios e intenta mantener el estatus quo, además de no ofrecer garantías, dejará al país en medio de un río turbulento.

Entre las dos se extiende el tortuoso camino de los resultados inciertos. Una plataforma de garantías democráticas verificables es ahora igual de importante que la elección de funcionarios, esas garantías deberían ser la base de un compromiso para llegar a buen puerto el 2011. Por eso, concluimos esta edición con una cita poco recordada, u olvidada a propósito, por los nuevos bolivarianos.

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano, el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”.

Simón Bolívar
Congreso de Angostura,
15 de febrero de 1819